

# Guayaquil: renovación urbana y aniquilación del espacio público

Xavier Andrade\*

Este estudio se basa en observaciones etnográficas realizadas entre los años 2001 y 2004 en la ciudad de Guayaquil, la ciudad más grande y el puerto principal de Ecuador. Con 2'500.000 de habitantes, Guayaquil ha sido sometido a un proceso acelerado de transformaciones urbanísticas durante los últimos cinco años. Conjugadas bajo el slogan político de “Más Ciudad” por quienes manejan el poder local, las reformas son conocidas localmente como *regeneración urbana*, para enfatizar el contraste con periodos previos caracterizados por caóticos manejos municipales. El proyecto ha sido reconocido internacionalmente como un ejemplo exitoso de gobernabilidad local principalmente por la efectividad de la limpieza sociológica emprendida y por el resurgimiento del sector turístico y de servicios asociados a dicha industria.

Abordando críticamente ciertos efectos sociológicos generados por él mismo, observaciones etnográficas dan cuenta del proceso de renovación urbana en Guayaquil como una producción esencialmente turística, la misma que tiene como contrapartida a la aniquilación gradual del espacio público expresada mediante políticas de control y vigilancia e, igualmente, de participación e incorporación de las coreografías del poder local por parte de los urbanistas.

Se hace uso de dos estudios de caso: el centro regenerado, y, un fenómeno de histeria social acaecido recientemente y relacionado con la fantasmagoría pandillera en la principal ciudad satélite de la elite, Samborondón.

---

\* Antropólogo, Ph.D.(c). New School University.

Mientras que las reformas urbanísticas en el primer caso refieren a un espacio público estrictamente disciplinado, el último sirve como ejemplo de la tendiente polarización urbanística de la ciudad y como ella se expresa en la construcción de un mercadeo del miedo. El telón de fondo lo provee el plan municipal “Más Seguridad”, el mismo que promueve la mayor privatización del espacio público en base a la concesión gradual del control callejero a compañías privadas de seguridad.

### La Muerte del Centro

Por *producción turística* me refiero a la construcción de un paisaje urbano supervigilado (en donde tanto la ecología cuanto lo arquitectónico es construido de acuerdo a una agenda exclusionaria) caracterizado por el establecimiento de un lenguaje patrimonial genérico dirigido a la explotación comercial y al uso restringido de tales espacios. Los grandes ejes de desarrollo del centro regenerado de Guayaquil, a saber: el Malecón 2000, el Malecón del Salado, la Avenida 9 de Octubre (principal arteria de la ciudad que se extiende entre los polos anteriores), y la máxima extensión proyectada para el próximo año, el Puerto Santa Ana, todos se rigen por cuatro elementos básicos:

- La nueva arquitectura se constituye bajo el lenguaje estético de un turismo global genético.
- El espacio renovado se articula alrededor de una serie de parques comerciales.
- Los elementos ecológicos son construidos como artificios ornamentales complementarios.
- El uso del espacio público es cuidadosamente reglamentado, disciplinado y vigilado por compañías privadas.

Primero, la mayoría de los proyectos arquitectónicos masivos implementados en Guayaquil apuntan a la creación de un mercado turístico y formas patrimoniales genéricas que atraigan a nacionales y extranjeros, éstos últimos especialmente por el hecho de que Guayaquil funciona como una conexión casi obligatoria para visitar las Islas Galápagos. Contrario a uno de

los principales principios de la industria turística, que es el de producir sentidos de *diferencia* que le otorguen un carácter propiamente local al paisaje, Guayaquil se ha convertido en un ejemplo de destinos transnacionales que reposan, precisamente, en el carácter genérico del paisaje creado.

En Malecón 2000, por ejemplo, un bote de paseo, denominado capitán Morgan parte de un muelle que tiene como símbolo el Mc Donald's adyacente. De hecho, la escultura de Ronald Mc Donald, a las afueras del restaurante, se ha convertido en una de las principales paradas fotográficas para los paseantes locales. Las escalinatas de la sección renovada del Cerro Santa Ana culminan con un museo naval con pintorescas recreaciones del pasado pirata del Puerto (con muñecos de madera con parches sobre un ojo y una pierna de madera incluidos).

Todo patio de comidas en los dos malecones renovados incluye un Kentucky Fried Chicken, y letreros adviriendo que *se guarda el derecho de admisión*, los mismos que sirven para excluir a vendedores ambulantes y sectores marginales tales como los travestistas e, inicialmente, también a los homosexuales. La música en vivo que se escucha regularmente en ellos es, frecuentemente, *new-age andino*, esto es la versión más ascética y neutra de la música regional. Los rótulos de los locales comerciales del Cerro han sido uniformizados, como tienden serlo los del casco central intervenido. Las fachadas de las casas renovadas —lo único que fuera sujeto a renovación— incluyen una fotografía de la encarnación anterior del inmueble para producir un contraste perverso entre una historia local tipificada a los ojos del paseante como degradante, y, el progreso provisto por la imagen turística.

El Puerto Santa Ana incluirá un rótulo del lugar, enclavado en el propio Cerro, al estilo Hollywood. Dicho proyecto ha sido publicitado como una reproducción del Coconut Grove de Miami, de esta manera emula a Los Angeles y a Miami simultáneamente. Los quioscos de comida rápida que han suplantado el sistema de abastecimiento tradicional privilegian hamburguesas y hot-dogs, y medianos empresarios en lugar de los pequeños vendedores independientes, los mismos que han sido desplazados a las fronteras de la regeneración cuando no directamente condenados a la miseria. En suma, los grandes proyectos avanzados reposan en la lógica más banal de los parques temáticos, de aquellos que intentan recrear o simular entornos para que los visitantes se sientan *en casa*, solamente que, en el caso de Guayaquil, el sentido de *hogar* viene dado por un simulacro de desarrollo turís-

tico a lo norteamericano, en donde las marcas de familiaridad son copiadas de registros comerciales pero también arquitectónicos.

El principal problema con esta política es que, mientras el patrimonio de bienes inmuebles de carácter histórico en la ciudad ha sido virtualmente borrado, nuevas formas patrimoniales genéricas han sido consagradas al ser asumidas como el único lenguaje urbanístico de la renovación. Aunque la noción de *patrimonio genérico* pueda resultar inherentemente contradictoria dentro de concepciones tradicionales que remiten a lo patrimonial al terreno del legado histórico exclusivamente, ésta sirve precisamente para designar a aquellas construcciones que son apropiadas ideológicamente por autoridades y ciudadanos con la finalidad de elaborar discursos sobre *identidad*, independientemente, de que ésta tenga ningún correlato con forma alguna de *tradicición*, sea ésta histórica o arquitectónica.

El patrimonio es, entonces, resultado de la capacidad de activar masivamente significaciones *ad hoc* a una infraestructura dada. Desde esta perspectiva, la Municipalidad –con apoyo de la industria turística- ha sido exitosa al convertir a estas formas patrimoniales en íconos del *nuevo Guayaquil*, una ciudad que, gradualmente, se va constituyendo también en un espacio genérico. Por ejemplo, en el sector central de Urdesa, la misma estética, palmeras incluidas, ha sido implantada a lo largo de su arteria principal. Gradualmente, allí donde se percibía una historia propia de la zona, vestigios de ésta van siendo eliminados.

Salvo monumentos históricos dispuestos en plazas –la mayoría de ellos de héroes masculinos asociados a la época independentista o fundacional de la ciudad- cuyo entorno fuera dramáticamente modificado para convertirlos en objetos centrales de contemplación en los nuevos espacios supervigilados, el resto de la arquitectura e iconografía son, literalmente, nuevos. En Malecón 2000, se salvaron algunos de los hitos que allí se encontraban tradicionalmente dispuestos, verbigracia cierta sección de árboles y unos pocos monumentos y, al extremo sur del mismo, el Viejo Mercado, ahora sanitizado y convertido en una sala de exhibiciones, desfiles y festivales. Paralelamente, elementos propios de la renovación –como los nuevos postes que la adornan en cada esquina- llevan inscritos el nombre del Alcalde, constituyéndose en homenajes materiales que recuerdan al peatón, paso a paso, del nuevo patrimonio así creado.

Segundo, el espacio renovado se asemeja a paseos comerciales con amplias pasarelas, plazoletas y jardines ornamentales. Los malecones renovados

y el futuro Puerto Santa Ana, tienen como eje la instalación de centros comerciales y patios de comida alrededor de los cuales se articula el flujo de paseantes. Aunque éste último se anuncie como *un gran parque contemplativo*, la ironía del slogan promocional refleja el hecho de que las estrategias de marketing a la realidad hay una distancia extrema. Puerto Santa Ana incluirá tres museos y centros de arte y espectáculos, restaurantes y zonas comerciales que coinciden con las residenciales. Por supuesto, si la lógica predominante es la de un paseo comercial y los jardines son para ser vistos pero no tocados, el despliegue de guardias de compañías de seguridad privada, administradas por un sistema de fundaciones para-municipales, asegura el orden debido a los paseantes. Desde técnicas de control del cuerpo (prohibiciones para besarse en los espacios regenerados) hasta amonestaciones, abusos de fuerza y arrestos, han sido implementados mediante guardias armados que se hallan destinados a vigilar cada rincón de las zonas renovadas.

Tercero, la ecología es ornamental y no inclusiva. En una ciudad con un alto déficit de áreas verdes: 3,5 mts en lugar de 10 como es la media internacional, Guayaquil ha optado por: fomentar la siembra de palmeras –mayormente importadas– en las zonas renovadas; implantar jardines decorativos que son cuidadosamente supervigilados; y, devastar las zonas arbóreas por donde se extiende la regeneración.

Con las palmeras el problema, en una ciudad tropical, es crucial. Este tipo de árbol no produce sombra ni tampoco oxigena el ambiente como otras especies lo hacen. En un contexto donde el sistema de portales –antigua estructura arquitectónica que aseguraba una mejor temperatura ambiente en zonas urbanas– ha sido abolido, y en largos sectores de la regeneración suplantados por bloques enteros de parqueaderos públicos, las palmeras guardan, en el mejor de los casos, un efecto decorativo. Inclusive en zonas como la Avenida 9 de Octubre, donde se ha privilegiado la idea de que el boulevard debe servir para agilitar el flujo de los transeúntes antes que fomentar la antigua apropiación espontánea del espacio que caracterizara a esta tradicional arteria vial, las palmeras y otras especies han sido colocadas no para proyectar sombra sobre las escasas bancas colocadas para el descanso de los peatones ni sobre la acera siquiera, sino sobre jardineras que funcionan como divisiones de espacios de parqueo directamente sobre la calle.

Que preocupaciones ecológicas han sido subsidiarias al espíritu de escapatate de la renovación en su conjunto es evidente no solamente por el uso de

árboles que, como las palmeras, evidentemente no proveen una solución ambiental ni de corto peor de largo plazo cuando la expansión demográfica de la ciudad demande todavía mayores áreas verdes. Lo es también por el carácter ilusorio de la oferta ecológica en las zonas regeneradas, mediante el privilegio de jardines ornamentales que no pueden ser disfrutados directamente sino solamente observados. Es decir que, cuando la Municipalidad publicita su tarea en este campo, deja de lado que experimentar zonas de descanso que tengan verdaderas áreas verdes es un problema de calidad de vida de una ciudad y que, someterlas a estas mismas a una lógica vigilada de observación pero no de apropiación, está lejos de mejorar los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, en la ciudad existen dos sistemas fluviales de envergadura. El Río Guayas, cuya antigua función como puerto principal ha sido suplantada por la construcción de sistemas de embarque marítimo, y, el Estero Salado, que constituye un sinuoso complejo manglar que atravieza sectores importantes de la ciudad. Ambos, hasta ahora oasis visuales en una ciudad que se siente como un desierto, serán privatizados mediante la retórica del turismo ecológico y el acceso a la naturaleza. En ambos casos, ellos serán gradualmente privatizados.

En el primer sistema, que será directamente afectado por el programado Puerto Santa Ana al construirse muelles para los nuevos residentes de clases pudientes. En el segundo, el estero que ahora mismo empieza a despuntar con botes de turismo para visitar las zonas de manglar, mediante concesiones hechas a empresas encargadas inicialmente de la purificación y limpieza de sus aguas. Si bien en este último, tales tareas han tenido un impacto positivo en términos de reforestación del manglar y proliferación de pájaros, la instauración de toures conllevará potenciales problemas de saturación de la zona y de anulación de la tranquilidad de la misma.

Cuarto, el espacio público es aniquilado mediante el disciplinamiento policiaco de la ciudadanía. El caso de la Plaza San Francisco sirve como modelo de lo que está ocurriendo en el espacio público del Guayaquil contemporáneo, más allá de lo ejemplificado por los proyectos mencionados anteriormente. La Plaza en ciernes se encuentra a un lado de la avenida 9 de Octubre y constituye un bloque tradicional en el centro regenerado. Antiguamente un eje de encuentro de jubilados, grupos jóvenes de hip-hop, teatro ambulante, vendedores discapacitados, pordioseros de iglesia, y, eventualmente, mítines políticos; actualmente se trata de una plaza cuya único atrac-

tivo vivo es una plaga de palomas que contaminan la misma con su excremento, el mismo que toma un promedio de tres horas diarias para ser limpiados por una compañía tercerizadora de limpieza contratada por la Municipalidad. Fotógrafos disfrazados en guayabera y sombrero de paja roquilla, etiqueta folklórica contemporánea, complementan una escena saturada de guardianes privados que se encuentran prestos a amonestar a quienes se sientan en lugares no permitidos o toman agua de la pileta central, etc.

El sitio contiene un Puesto de Auxilio Inmediato (P.A.I.), con gendarmes de la Policía Nacional prestos, en teoría por lo menos, para acudir en casos de emergencia. Este tipo de instalaciones es financiada con donaciones privadas. Múltiples guardianes privados administrados por la Fundación Guayaquil Siglo XXI, conocidos entre algunos comerciantes informales como *los alemanes* por sus abusos y trato despótico, cuidan el lugar. El sistema mismo de fundaciones privadas que manejan fondos públicos municipales más allá de cualquier contabilidad social es una aberración permitida por la nueva estructura del poder local. Es una de ellas, Guayaquil Siglo XXI, precisamente la que se halla a cargo de la privatización del espacio público, como plazas, avenidas y calles aledañas a las de la renovación. Este es un fenómeno que ha sido fomentado gradualmente por el programa “Más Seguridad” del municipio local.

Recientemente, desde fines de noviembre de los corrientes, un conflicto entre la Policía Nacional y el Municipio se suscitó debido a formas de operacionalizar y coordinar a las distintas fuerzas represivas envueltas. Los actores del control armado del espacio público al momento son múltiples, Policía Nacional, Policía Metropolitana, Guardianías Privadas, e inclusive Fuerzas Armadas. Con frecuencia, en la zona regenerada se puede encontrar representantes de todos ellos en un solo bloque. Si bien la militarización del espacio callejero solo recientemente mereció un debate, su instauración gradual ha pasado generalmente desapercibida, salvo cuando, eventualmente, abusos o excesos por parte de guardianes privados ocurriera y esto llegara ocasionalmente a foros sobre derechos ciudadanos o a la sección de opinión pública de los principales periódicos.

En la práctica, por ejemplo, la zona de Malecón 2000 a la que inicialmente fueron facultados los gendarmes privados, fue extendida a por lo menos dos calles paralelas (Panamá y Córdova) a malecón y perpendiculares a la avenida 9 de Octubre, de la noche a la mañana, aparentemente para cu-

brir la zona bancaria, la misma que, siempre, contiene a su propia guardiana. El resultado es una amplia gama de uniformados, muchas veces agolpados en un solo bloque. Por ejemplo, una mañana cualquiera, después de las más recientes negociaciones de dicho plan, uno encuentra patrullando el mismo espacio a policías metropolitanos, policías nacionales, fuerzas armadas, guardianes privados de oficinas o instituciones residentes, y guardianes privados de las compañías contratadas por “Más Seguridad”. Todos ellos armados y, por lo menos en teoría, listos a reaccionar.

En la práctica, combaten cualquier movimiento por parte de vendedores informales y, en el caso de ser hombres, se hallan prestos para piroppear a las paseantes. Pero el hecho de que se hallen armados puede convertir a este estado de cosas en una situación explosiva en cualquier momento. De hecho, en muchas ocasiones, los guardianes privados tienden no a actuar como policías comunitarios que privilegiarían el trato directo y el diálogo con los ciudadanos, sino que prefieren el uso de silbato para hacer sentir su presencia y amonestar públicamente a aquellos que llegaran a romper las reglas de decoro y veneración del espacio creado. El silbato, además, sirve para ridiculizar al penitente frente al resto de los paseantes u ocupantes de una plaza, calle o parque. Cuando hacen uso de la palabra, muchas veces por su escasa preparación, terminan asumiendo la misma actitud, agresiva, que con el silbato.

En medio de actitudes déspotas, abusivas y autoritarias, el Plan “Más Seguridad” reposa, para su propaganda pública, en un concepto neutro, la “cooperación interinstitucional” que justifica la colaboración entre el gobierno local, la empresa privada a través de las principales asociaciones gremiales (las Cámaras) y la Junta Cívica, las compañías privadas de seguridad y la Policía Nacional. En la práctica, sin embargo, se trata de una concesión del control del espacio público a manos privadas, bajo contrato directo con la Municipalidad.

El Ministro de Gobierno y Policía ha cuestionado dicha concesión sobre la base de su inconstitucionalidad y de potenciales peligros para la ciudadanía al encontrarse controlados por guardianes privados de dudosa capacitación y procedencia, y, en el peor escenario, la eventual constitución de bandas paramilitares controladas directamente por el Municipio. Parecería evidente, por lo observado cotidianamente en los sectores que cuenta con perímetros cerrados, tales como el Malecón 2000, que los gendarmes care-

cen de capacitación mínima en relaciones comunirarias, al punro de haber atestiguado personalmente maltratos a vendedores infantiles que han osado incursionar con su mercadería denrrro de ellos.

A un costo aproximado de \$100.000 mensuales, pagados por la empresa privada, 40 punros de la ciudad han sido concesionados a 4 compañías privadas, a pesar de la disposición expresa del Ministerio del ramo para suspender la medida temporalmente hasta que hubiera un marco legal adecuado que considerara la evaluación y supervisión de los gendarmes privados. Con esta medida, por primera vez, se expande oficialmente el uso de guardianes privados en escenarios callejeros, en lo que, expresamente, se espera sería el primet paso en la constitución de una *policía autónoma*, distinta a la municipal ya existente, la Metropolitana –famosa por sus abusos contra indigentes y vendedores ambulantes.

Mientras que el argumento del ex Ministro de Gobierno, para una suspensión temporal del permiso de operación de las compañías de seguridad contratadas por el Municipio, declarada en Diciembre 13 de 2004, es precisamente la ilegalidad o inconstitucionalidad del contrrol del espacio público por intereses privados, el Alcalde lo ha acusado de una irresponsable *vendetta* personal. Jaime Damerval, el ex Ministro, tuvo una abierta actitud crítica frente al líder socialcristiano León Febres Cordero y el propio Alcalde Jaime Nebot, especialmente a través del espacio editorial que él tuviera hasta su nominación en las páginas de El Universo. Excepcional para el caso de un editorialista guayaquileño, Damerval, criticó, a lo largo de sus entregas, el carácter legalmente dudoso de las fundaciones para-municipales que funcionan como entidades ejecutoras de la obra de la administración local.

En un medio en el cual cualquier tipo de crítica pública es vista como un acto de disidencia y veligerancia, no extraña que el Alcalde utilice un lenguaje personalista para avanzar en su agenda privatizadora, un lenguaje que divide a la ciudad enre *amigos y enemigos* de ella. El argumento del ex Ministro fue básico: si la empresa privada está invirtiendo en compañías de seguridad privadas, mejor sería canalizar tales recursos a la capacitación del personal de la Policía Nacional y la ampliación de su capacidad operativa. Una investigación adicional sobre los intereses que podrían articular directamente a la Municipalidad con ciertas compañías de seguridad, a través de la Fundación Guayaquil Siglo XXI, es todavía necesaria, o sea un estudio sobre la economía política de la seguridad pública, sobre el carácter empresa-

rial y político de los procesos señalados. El hecho de que la cuestión pública se convierta en un problema de lealtades a una agenda exclusionaria y represiva, como es la implementada por la Municipalidad, revela precisamente la dimensión política del debate reciente.

En la actualidad, por lo tanto, se asiste a un proceso de aniquilación del espacio público. Si, hasta ahora, la vigilancia privada se encontrara limitada a los perímetros cerrados de los proyectos masivos creados por la regeneración, el discurso oficial de la *cooperación interinstitucional* ha servido para legitimar la expansión de la vigilancia armada en 40 escenarios callejeros. Todo esto ocurre en un medio en el cual la hegemonía, esto es el poder y el consenso, generada por la administración municipal es prácticamente total.

De hecho, no existe un debate público sobre los efectos perversos de la renovación urbana, ni de la limpieza sociológica que ha ocurrido, ni del exterminio masivo de gatos y perros que habitaban en el antiguo centro, ni de los abusos cotidianos de los guardianes privados en los mismos espacios regenerados, ni del despilfarro de energía eléctrica en postes sobreiluminados, ni de la distribución restringida de kioscos de comida que favorece a medianos comerciantes y cadenas de comida rápida establecidas, ni de la destrucción del patrimonio arquitectónico de la ciudad por negligencia institucional, ni del carácter inconsulto de los proyectos masivos tales como el Puerto Santa Ana, ni de la agenda autoritaria que se encuentra detrás de todos los dispositivos de control y vigilancia establecidos y por establecerse.

Las voces críticas, como las del propio Damerval, son puntuales y excepcionales, y las luchas gremiales —como las de ciertas asociaciones de vendedores ambulantes— generalmente pasan desapercibidas. Se trata, pues, de un estado de control legitimado por el temor a la inseguridad. En medio de todo este panorama, de espectacular desolación, el carácter artificial de seguridad y pertenencia ciudadana que se ha creado, puede verse resquebrajado inmediatamente por el mero poder del rumor. Más adelante analizo un estudio de caso pertinente a esta temática.

### **Tres Cerditos: histeria social, seguridad pública y Policía cultural**

En diciembre de 2004, una ola de rumores se levantó en la ciudad satélite de Samborombón —el nuevo reducto de las clases pudientes que se caracte-

riza por ser un conglomerado de ciudadelas de acceso restringido por sistemas de seguridad privada. Dicho cantón se halla ubicado en lo que fuera antes una población distinta dispuesta frente a Guayaquil, al cruzar del Río Guayas, la que fuera históricamente la principal arteria fluvial del puerto principal. Dotada de centros educativos y los más modernos centros comerciales, Samborondón tiende a convertirse en un enclave autocontenido para los sectores privilegiados.

De hecho, muchos de los adolescentes y jóvenes de la zona se confiesan incapaces de moverse en la gran ciudad y de encontrar, en cambio, en el sentido de protección dotado tanto por la vigilancia y las barreras físicas que separa una ciudadela de otra, cuanto por el moverse dentro de círculos homogéneos de relaciones sociales, el sentido de una experiencia ciudadana *sui generis*: la que ha sido discutida en la prensa como propia de los *chicos burbuja*. Su sentido de seguridad viene dado, por supuesto, no solamente por un entorno físico patrullado, sino también por el hecho de pertenecer a una misma clase social y ser también homogéneos étnicamente.

Una de las claves de dicha experiencia de seguridad se encuentra, precisamente, en la artificialidad de la misma, en sentidos de pertenencia que son discriminatorios y en la creación ilusoria de oasis de desarrollo que se hallan más allá de los cambios estructurales de la sociedad más amplia. La comercialización de viviendas en ciudadelas cerradas, que generalmente incluyen lagos privados y palmeras importadas, viene precedida de estrategias de mercadeo del miedo, donde el tropo de la seguridad se convierte en parte de un paquete promocional para garantizar el acceso a un mundo material que incluye una casa o departamento, piscinas, y, sobretodo, fronteras amuralladas y vigiladas durante las 24 horas del día, todo el año. La sensación de seguridad ofrecida, por lo tanto, depende de la inmediata cercanía de una policía cotidiana.

Samborondón es, pues, desde la década pasada, la expresión más evidente de la polarización espacial de la sociedad guayaquileña y de un nuevo paisaje urbano que encuentra su contraparte en las masivas extensiones de barrios marginales y suburbanos. Estos dos tipos de ecologías, la de la opulencia y la de la pobreza, tienen también formas distintas de hacer noticia en los medios. Mientras que Samborondón regularmente aparece, a través de las páginas de farándula, cuando de actividades sociales relacionadas con su próspera economía y exclusiva vida nocturna se trata, los barrios margi-

nales son retratados ora como protagonistas de crónica roja ora como pobladores demandantes de acceso a recursos urbanos básicos.

Hasta aquí la historia retratada no nos dice nada particular al tratamiento mediático de las diferencias sociales para el caso guayaquileño. De hecho, la criminalización de los sectores populares es una dinámica que es inherente al propio discurso sobre la modernidad urbanística, donde *lo anti-social* se convierte en uno de los motivos civilizatorios privilegiados, y, por otro lado, la creación de ciudades satélites hipervigiladas es también un modelo importado de los suburbios de ciudades desarrolladas. Aunque tampoco sea particular a Guayaquil, uno de los agentes de la violencia más explotados por los medios es, desde hace dos décadas, el de las pandillas juveniles. Fueron precisamente éstas las que servitían, en la primera mitad de diciembre de 2004, como eje articulador entre histeria social, seguridad ciudadana y policía cultural. Los detonantes para una forma de miedo inédita en el medio fue la fantasmagórica aparición de tres cerditos.

En sus expresiones contemporáneas en Ecuador, el fenómeno pandillero data de mediados de los años ochenta, siendo sus manifestaciones delinuenciales más notorias en el caso guayaquileño, si bien Quito tiene su propia tradición al respecto. A fines de aquella década, fue en Guayaquil, sin embargo, cuando la delincuencia juvenil asociada a pandillas sirviera para legitimar políticas de control y represión más amplias. “Estados de emergencia” fueron declarados por las autoridades provinciales con apoyo militar y policial del Estado central, con la finalidad de aplacar presuntas oleadas delinuenciales que, no curiosamente, coincidirían con situaciones de crisis económica y política de gran envergadura tanto a inicios como a finales de la década pasada, esta última coincidente con la bancarrota generalizada del sistema financiero en 1999.

Las secuelas de estas decisiones fueron evidentes: la ciudad fue militarizada y los jóvenes y menores de edad de estrato popular masivamente encarcelados. La manipulación de la información sobre la dimensión del fenómeno pandillero, en particular, y de la delincuencia, en general, fueron una de las estrategias utilizadas por autoridades y medios para controlar el descontento social.

A inicios del siglo XXI, la violencia pandillera ha sido uno de los principales objetivos poblacionales tendientes a ser afectados por políticas represivas recientes tales como la de la actual alcaldía de Guayaquil cuyo slogan,

“Más Ciudad”, tiende a generar adhesiones ciudadanas al acelerado proceso de renovación urbana que ha tenido lugar desde hace cinco años atrás, cuando el emblemático Malecón 2000 fuera inaugurado. Elemento discursivo clave en la retórica de la renovación ha sido el de la seguridad ciudadana, que ha sido puesto en práctica recientemente mediante el programa “Más Seguridad”, un proyecto que amplía la cobertura policial de la ciudad y que, por primera vez, otorga la capacidad a empresas privadas de guardiana de controlar sectores urbanos más allá de los espacios públicos que la propia renovación ya ha semiprivatizado, como son, el propio Malecón y el Cerro Santa Ana, así como el boulevard principal del centro de la ciudad, la Avenida 9 de Octubre y sus calles aledañas.

La violencia pandillera de los años más recientes se caracterizaría por dos tendencias. La primera es hacia la fusión de distintas agrupaciones con la finalidad de ampliar su control territorial a través de estructuras asociativas de mayor envergadura conocidas como *naciones*. La segunda, vinculada pero no enteramente dependiente de la anterior, es la presunta mayor globalización del accionar de tales asociaciones. En la práctica, sin embargo, los aspectos esenciales a la delincuencia asociada a las pandillas continúan siendo los mismos.

Por un lado, la violencia es circular, esto significa que sigue siendo producida y resuelta dentro de territorios que coinciden mayoritariamente con barrios populares y marginales, aunque presuntamente el nivel de sofisticación delictiva sea más alto y las venganzas más sangrientas. Por otro, las conexiones globales se reducen a convertirse en apropiaciones locales de una simbología y un estilo extrapolado desde pandillas latinas basadas en distintas ciudades norteamericanas, tales como los *Latin King* y los *Netas*, como parte de un conjunto de expresiones que incluyen graffiti, música, gestualidad corporal, y estilos de vestido.

Dos hechos no relacionados inicialmente coincidieron en la primera mitad de diciembre de 2004. El plan “Más Seguridad”, que supone para su eficaz funcionamiento una alianza efectiva entre el gobierno local, la policía y la empresa privada, y los *Tres Chanchitos* tendiente a triplicar, en el corto plazo, el número actual de efectivos encargados del control de avenidas y calles.

Dentro de este plan, la Alcaldía participa mediante la dotación de bienes tales como camionetas para supervigilancia de la actividad callejera y la contratación de 4 empresas privadas de seguridad para cubrir 40 puestos de

observación situados, supuestamente, en las zonas de mayor actividad delin cuencial de la ciudad. Por su parte, la Policía Nacional ha ofrecido la ampliación de la fuerza policiaca afincada en Guayaquil y la coordinación y supervisión de las actividades de control asignadas a las guardiánias privadas. Finalmente, éstas últimas ofrecen, bajo contrato con la Municipalidad, el contingente humano para cubrir los puntos asignados.

La alianza de intereses diversos, por supuesto, no ha estado libre de polémicas. El propio Alcalde de la ciudad ordenó retirar las camionetas donadas a la Policía Nacional durante un fin de semana para *sacudir la conciencia* de las autoridades del Estado. Su orden obedeció al supuesto uso indebido de estos bienes, los mismos que, de acuerdo a sus denuncias, habrían sido asignados a otros cantones en la provincia del Guayas y no fueron restringidos al control de la ciudad de Guayaquil. La Policía respondió a regañadientes ofreciendo no sólo ejecutar el plan al pie de la letra sino a ampliar el número de ropas acantonadas en la ciudad. La asignación de las cuatro empresas privadas de vigilancia, finalmente, fue concertada con apenas escaramuzas sobre la inconstitucionalidad que medidas de esta naturaleza suponen al dejar gradualmente de lado, en la práctica, el monopolio estatal de la seguridad pública en manos privadas.

Disfrazada como *cooperación y apoyo* a la Policía Nacional, por parte del poder local a través de una de las fundaciones paramunicipales (Siglo XXI, cuyos guardias son conocidos por los vendedores ambulantes del centro de la ciudad como *los alemanes* por su trato agresivo y autoritario) y entidades empresariales privadas como la Cámara de Comercio del Guayas, la sesión ilegal del control de la ciudad fue debatido públicamente pero no al punto de cuestionar esencialmente sus potenciales efectos sobre la vida ciudadana.

Al tiempo que “Más Seguridad” fuera implementado con un contingente represivo que triplicará, en el corto plazo, al actual, sus primeros efectos no tuvieron relevancia alguna sobre el volumen de la actividad delictiva en la ciudad, así como tampoco lo hicieron durante el fin de semana que el Alcalde retirara los vehículos municipales. En el auge de la propaganda municipal sobre los beneficios del nuevo plan, tres creditos aparecieron esparcidos en las paredes de distintos sectores de la ciudad.

Visualmente, se trata de una plantilla en negativo con el relieve lateral del cuerpo de un cerdo, que siendo sopleteada la pintura sobre la misma, deja una impronta positiva sobre la superficie escogida. Se trata, por lo tan-

to, de una técnica clásica del rotulaje en una ciudad donde la misma va siendo rápidamente reemplazada por el diseño en computadora y el despliegue monótono y estandarizado de gigantografías en cajas iluminadas. De hecho, los cerdos, en ese sentido, resultan una anomalía en la nueva estética de un espacio público homogenizado a varios niveles: fachadas que deben guardar cierta cromática, baldosas que cubren las nuevas aceras, adoquines sobre las calles, postes sobreiluminados con la huella del nombre del Alcalde, y establecimientos comerciales cuyos rótulos deben ser modificados.

Dispuestos originalmente en solitario en sectores residenciales tales como Urdesa y partes del centro, sin que causaran preocupación alguna, esta vez emergieron de tres en tres en una locación distinta, la vía principal de Samborondón, a lo largo de la cual han sido instalados algunos establecimientos educativos asistidos mayoritariamente por habitantes del sector. De ahí en adelante, la vida social de los *Tres Chanchitos* tiene ribetes cuasi cómicos sino enteramente absurdos, pero finalmente decisores del destino del espacio público en la ciudad de Guayaquil.

Un correo electrónico circularía dando cuenta del significado de los, ahora, preocupantes símbolos: se trataría de una venganza transnacional orquestada por los *Latin King*, pandilla latina de raigambre en Estados Unidos con matrices en Latinoamérica y España, uno de cuyos miembros habrían sido asesinado en España por un millonario ecuatoriano o por jóvenes pudientes residentes en la zona de La Puntilla en Samborondón.

Como los cerditos fueran pintados en tres colores diferentes, su cromática sería clave a la hora de la escenificación de un espectáculo violento que habría estado por desatarse en los días mismos en que el rumor fue cobrando vigor. Chanchos negros indicarían muerte, rojos matanza, blancos tranquilidad. Es significativo destacar que la asociación entre colores e implicaciones violentas fueran directamente una creación de noticieros televisivos, como para redondear un rumor que, por la magia de su exposición pública masiva, terminó convirtiéndose a una velocidad relámpago en noticia de última hora.

En el ojo por ojo de la lucha de clases, en este hipotético ajuste transnacional de cuentas que tendría lugar en la antesala misma del territorio habitacional de los banqueros extraditables, las autoridades de colegios y universidades de la zona, al unísono con padres y madres de familia, urgirían medidas precautelares. Por ejemplo, las clases fueron suspendidas inmediata-

mente en algunos establecimientos y charlas informativas sobre pandillerismo fueron organizadas *in promptu*.

Todos los noticieros locales de televisión y el principal periódico del país, El Universo, con referencias en primera plana, en materia de una semana empezarían asignándole valor de noticia al rumor, expandirían el mismo al conjunto de la sociedad como si de una venganza pandillera con conexiones internacionales se tratara, acogería la histeria de la elite que sintetiza la retórica fundamental de lo *anti-social* como vinculado a jóvenes de estratos populares y de composición étnica chola, negra y montubia, y moralizaría —una vez que su autor se revelara a la luz pública— sobre el castigo a quienes causaran este potencial daño social. Durante este drama mediático, *expertos* fueron consultados, angustiados pero también escépticos estudiantes de la zona entrevistados, y declaraciones policiales tomadas en cuenta. La noche previa a la declaratoria de autoría, después de días de escándalo, un oficial decía frente a las cámaras, pidiendo tranquilidad a la ciudadanía, que “la hipótesis que se barajaba era la de un estudiante de arte que se encontraba realizando un ejercicio de marketing”.

La ola del rumor y del escándalo empezó en el terror y terminó en el territorio del arte público, corral a donde los chanchitos habían pertenecido de principio a fin. Una fotografía del autor, un joven diseñador gráfico que guarda reputación como artista visual y que inclusive ha sido premiado en festivales organizados por el propio Municipio, borrando, junto a su novia, las imágenes de los chanchos originales fue el epílogo de esta historia.

Desde su concepción en tiempo de las recientes elecciones de octubre de 2004, Daniel Adum Gilbert, su autor, concibió el proyecto como una crítica a la *chanchocracia*, un término acuñado por él para formular una crítica al establecimiento político del país. Un juego de palabras que viene bien a la hora de ver las riñas frecuentes y los artilugios utilizados por la clase política al momento en que Ecuador es declarado internacionalmente como el país con los partidos políticos más corruptos del mundo.

Pero el proyecto *chanchocracia*, al haber sido concebido e inicialmente realizado durante la elección de representantes al poder local y seccional, y al haber sido emplazado en las calles de Guayaquil, y, al haber suscitado las reacciones que aquí han sido descritas, guarda relación directa no solamente con la democracia en abstracto sino también con el nuevo ordenamiento urbano. De hecho, la resolución del proyecto —y la culminación de la ola de

rumores- tuvo lugar mediante la entrega del artista en la oficina de la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio, con latas de pinrura de pintura en mano y dispuesto a enmendar el daño.

En un acto final de justicia poética, el del sometimiento del artista, éste utilizó pintura gris para cubrir los chanchos, dejando la fantasmagoría de su efímera existencia impregnada como memoria de un comenrario sobre la política que se halla vedado por el hecho de ser no canalizado a través de la propaganda partidaria proselitista sino como expresión espontánea, individual y completamente desarticulada de aquellos movimientos que ven en el discurso organizado de la ciudadanía y la sociedad civil la única forma legítima de tener una voz sobre el conflicto social.

En Guayaquil, la gestión cultural, en general, y las intervenciones artísticas en el espacio público, en particular, se hallan enteramente en manos oficiales. De hecho, otro elemento retórico de peso para propagandizar los beneficios de la renovación urbana, es el del crecimiento de la oferta cultural y, como resultado de ello, de la *autoestima* de los y las guayaquileños/as. Por ejemplo, existen un auge de festivales, concursos y salones organizados por el cabildo periódicamente, y una serie de murales comisionados por el Municipio han sido dispuestos bajo distintos pasos a desnivel en vías de gran afluencia.

Aparatos tales como festivales y concursos, en un medio donde espacios alternativos son prácticamente inexistentes, ha conllevado a la explotación promocional del trabajo artístico y a la canalización pastoral de su trabajo. La retórica de la renovación urbana es, de hecho, crucial para el apuntalamiento de nuevas nociones de cultura cívica, una de cuyas expresiones es el respeto irrestricto de los bienes públicos y privados, lo cual es reforzado por el aparato legal que, en el caso en ciernes, reza literalmente: "... los desadaptados que manchen o dañen la propiedad pública o privada, serán sancionados con la multa (del doble del valor de la pintura y mano de obra) ... y, además, con prisión de siete días y con el cumplimiento del trabajo comunitario de pintar diariamente las paredes manchadas o dañadas".

Toda forma de intervención artística en el espacio público que careciera de la bendición municipal, por lo tanto, corresponde a un acto vandálico, mancha o daño. El hecho de que la reacción pública a esta acción, aquella escandalosamente construida por los medios, fuera formulada de partida en el lenguaje de la lucha de clases (*un millonario, jóvenes millonarios, vs. los*

*Latin King*), sin embargo, alude al ordenamiento urbano como una forma de creación de fronteras espaciales y de separación entre los polos prósperos, expresado por el entorno de Samborondón, y, el más indefinido de las zonas marginales. El terror despertado es un efecto de la transgresión de tales fronteras, las mismas que son cuidadosamente precauteladas por los cabildos y sus empresas de vigilancia privada.

En el enclaustramiento de los habitantes de Samborondón y sus fantasmales justicieros, los jóvenes pobres de Guayaquil, en enclaves mutuamente excluyentes, reposa la emergencia histórica del problema. Una mancha delineada en el contorno de cerdos, invadiendo zonas precauteladas. El *daño a la propiedad privada* tomó ribetes conspirativos y terroristas por el hecho de tener como objeto de potenciales ataques a la propia juventud de los enclaves privilegiados. Esta es, precisamente, la peor pesadilla de Samborondón: la ilusión de seguridad que fronteras artificiales crean y la diferenciación de distintas jerarquías de ciudadanía que las mismas fomentan ideológicamente para designar como *desadaptados* o *antisociales* a jóvenes de estratos populares.

## Conclusión

El plan “Más Seguridad” radicaliza estos efectos ilusorios y los extiende al resto urbano, haciendo uso para ello de compañías privadas de seguridad que cuenran con personal armado de dudosa preparación en relaciones humanas, exponiendo a la ciudadanía a la internalización de ideas sobre seguridad que, en la práctica, restringen sus derechos ciudadanos por la disciplina del miedo, y apuntalando una lógica de vigilancia y silencio que el caso de los *Tres Chanchitos* pusiera en cuestionamiento de la manera más ingenua y cómica, pero, finalmente, también prejuiciada, racista y paranoica.

El orden encarnado por los urbanistas como efecto de la coreografía del poder local orquestada bajo la retórica de “Más Seguridad”, forma parte de los efecros disciplinarios de la renovación urbana, los mismos que, si bien han sido supervigilados con guardianes armados de carne y hueso, guardan relación con una actitud histórica frente a la democracia y el poder que ha depositado en un proyecto político determinado —el socialcristiano— la capacidad para decidir aspectos claves en la esfera pública que terminan influen-

ciando la vida íntima de los ciudadanos durante las últimas dos décadas. En este sentido, el miedo de padres de familia, estudiantes, y autoridades escolares es no solamente histeria social sino expresión íntima de sentidos de seguridad que han sido construidos históricamente como producto de las nuevas retóricas sobre renovación urbana y seguridad.

El autoritarismo emergente a inicios del siglo XXI en Guayaquil, por lo tanto, reposa en una serie de reformas arquitectónicas y urbanísticas, así como en la generación de un ambiente de histeria social que legitima desde el control literal de los cuerpos hasta la anulación gradual del espacio público. El propio centro de la ciudad es un ejemplo claro de esta dinámica, con malecones renovados en donde el paseo, el manejo corporal y el descanso de los ciudadanos está estrictamente normado (inclusive con letreros que literalmente rezan “se guarda el derecho de admisión”, prohibiciones de besarse públicamente por considerárselo obsceno, y códigos de etiqueta para hacer uso de las bancas y bienes).

De hecho, la arteria principal de la ciudad, el Boulevard 9 de Octubre, cuyas esquinas fueran tradicionalmente apropiadas por distintos sectores ciudadanos, desde jubilados y discapacitados hasta grupos juveniles de estratos populares, fue rediseñado con la idea de promocionar paseos que tuvieran el mayor flujo posible. Con pocas bancas dispuestas peligrosamente cerca de las calles y prácticamente al mismo nivel del tránsito vehicular, árboles y palmeras que escasamente producen sombra puesto que se hallan dispuestos para potencialmente brindarla a los autos parqueados y no a los peatones, y con un sistema de semaforización que promueve un cruce acelerado de las principales transversales, los transeúntes deben enfrenar todavía algunos problemas derivados de una lógica según la cual ellos son la última rueda del coche.

Así, por ejemplo, las baldosas de cerámica colocadas sobre las aceras representan un peligro gravísimo puesto que son extremadamente deslizantes cuando se ven mojadas. Como en los propios malecones y en las nuevas zonas regeneradas como la arteria comercial de Urdesa, un barrio situado al norte de la ciudad y que sirviera de asentamiento de clases pudientes desde los años cincuenta hasta los años ochenta, esquinas donde la afluencia de peatones es enorme (verbigracia la de Pedro Carbo y 9 de Octubre), largas jardineras ornamentales fueron colocadas hasta el borde mismo de la calle, promoviendo un efecto perverso.

En ellas, los transeúntes para continuar su camino lo hacen directamente sobre las calles adoquinadas, compitiendo directamente con el tráfico vehicular. Plazas que antiguamente sirvieran para la asociación espontánea de la gente para disfrutar de espectáculos brindados por artistas de diversa índole son controladas al detalle, con amonestaciones promovidas por el uso de silbatos cuando alguien se atreve a descansar al filo de una pileta, por ejemplo.

El proceso de limpieza sociológica ha sido exitoso en las zonas hasta donde llegan las fronteras de la renovación urbana. Los vendedores informales fueron o confinados a mercados con escasa afluencia de compradores, en el mejor de los casos, o simplemente expulsados. En uno de los casos más dramáticos, asociaciones de discapacitados que tenían acceso a la venta de lotería y la prestación de servicios telefónicos de alquiler, fueron desplazadas sin brindarles alternativa alguna de empleo. No sólo los discapacitados han sido invisibilizados, sino también los mendigos y los proveedores de comida típica.

Los primeros, especialmente durante las noches y los fines de semana, reaparecen para apropiarse de zonas que todavía guardan el sistema de portales para cobijarse como pueden durante la noche. Los vendedores de comida fueron reemplazados por un sistema de kioscos que promueve el consumo de comidas rápidas favoreciendo el acceso a medianos comerciantes antes que a los pequeños capitalistas que, siendo autoempleados, habían dependido de la economía del centro por décadas enteras. En las fronteras de la renovación, sin embargo, se encuentran estos mismos actores pero esta vez mayormente marginalizados especialmente porque su desplazamiento significa situarse en zonas de menor circulación.

Presentada la limpieza sociológica y el ordenamiento arquitectónico como beneficios para crear un mercado turístico -sector de servicios que es uno de los principales beneficiarios de estos procesos— los urbanistas mismos interiorizan el ascetismo contemporáneo, el mismo que incluye fachadas, paredes y muros impecables cuya desfiguración mínima, como en el caso de los *Tres Chanchitos*, termina generando adhesiones negativas por parte del ciudadano común. La espectacularización de la renovación urbana va de la mano del silenciamiento en la esfera pública bajo penas de penitencia y castigo, las mismas que generalmente no son necesarias, salvo en el caso de informales y mendigos quienes pagan su presencia con decomisos, prisión y/o desplazamientos forzados.

Para la mayoría de los ciudadanos comunes, sin embargo, la renovación ha sido apropiada desde los resquicios que el sistema les permite, esto es como lo que es esencialmente, un espectáculo orquesrado desde el poder local para crear ilusiones democratizantes que terminan convenciendo a los urbanistas del cambio. Un cambio que es idolatrado con el culto a un espíritu de escaparate. La noción de *autoestima* ha sido la fórmula retórica bajo la cual el poder y sus discípulos terminan conjugando la magia comercial del poder local y del Estado. La lógica de la *producción turística* es la clave para entender la renovación urbana en el caso guayaquileño. El control, la vigilancia y la privatización del espacio público, acompañan la creación de simulacros de modernidad para el mero placer consumista, un placer que nunca ha sido muy democrático.